

El Salvador proceso

informativo semanal

año 9
número 377

marzo 29
1989

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- Precarias elecciones
- Las organizaciones laborales ante las elecciones
- Elecciones en medio de la guerra
- Consenso bipartidista de EUA hacia Centroamérica
- Balance político de las elecciones (I)

Precarias elecciones

Por sexta vez en los últimos 7 años los salvadoreños concu- rrieron a elecciones el pasado 19 de marzo, y como las 5 prece- dentes fueron elecciones en guerra. Por muchas razones, sin embargo, los resultados, circunstancias e imprevistos inmediatos en que éstas se celebraran les confieren una legitimidad bastante inferior a la ya de por sí cuestionable legitimidad de las ante- riores; aun cuando respecto a la legalidad mantengan un valor similar.

Las recientes elecciones, en primer lugar, gozan de una muy limitada representatividad, considerando que el total de votos válidos sólo alcanzó el 50% de los votos posibles, estimados en 1.84 millones de ciudadanos con carnet electoral; y apenas un 37% de la población nacional en edad de votar. Muchos aducen que dadas las condiciones de paro al transporte y boicot declarado por el FMLN le confieren a sus resultados un mayor valor cualitativo. Pero no hay porque hacer de una situación impuesta una virtud; habida cuenta de que los rebeldes abrieron una real posibilidad de que se celebrasen unas elecciones de carácter nacional verdaderamente democrática, como lo prueba el que todos los partidos políticos, el mismo gobierno y Asamblea Legislativa se viesen forzados a discutir su ofrecimiento. Tam- poco puede negarse que el clima de temor e inseguridad ge- nerado por la guerrilla fuera, en esta ocasión, bastante más se- vero que en anteriores oportunidades; constituyéndose de paso en un rotundo mérito a las valoraciones castrenses que pre- tenden vender la imagen de una guerrilla diezmada y en franca desbandada.

Sin embargo sería excesivo otorgar al FMLN todo el crédito de la incertidumbre prevaleciente y del abstencionismo electoral de allí derivado. En primer término porque muchos pudieron no ir a votar por propia voluntad. Y en segundo, porque tal efectividad en el boicot no la habría logrado el FMLN sin la notable cooperación, voluntaria o involuntaria, del ejército. Efectivamen- te, la mañana de las elecciones el ejército reaccionó en la capital con un desproporcionado bombardeo aéreo a lo que fue una rutinaria incursión rebelde, y a la que podía haber respondido con la discreción y serenidad que el momento requería y que en otras ocasiones ya ha mostrado. Horas antes del inicio de las vo- taciones retenes militares asesinaron a dos periodistas nacio-

nales en San Salvador y San Miguel; mientras que otras unidades castrenses guardan responsabilidad directa en la muerte de otro periodista holandés, ocurrida en Usulután. No se trata, de momento, de que hubiese habido en todo ello un accionar premeditado de parte de algunos mandos del ejército, hipótesis que de modo significativo se viera obligado a descalificar explícitamente el Ministro de Defensa ante la comunidad de periodistas nacionales e internacionales; pero el efecto de pánico producido en la población fue igualmente eficaz con premeditación o sin ella.

Independientemente de la poca representatividad alcanzada por estas elecciones; de las razones que asistieron a la guerrilla para contribuir con su táctica de paro al triunfo de ARENA; y de los resultados concomitantes con lo anterior que produjeron las acciones de la Fuerza Armada, muy poco cambia la realidad nacional. Con un apoyo popular mucho más manifiesto que el que ahora ostenta ARENA, muy poco pudo hacer el Pñte. Duarte para evitar que las condiciones de guerra y crisis imperante condujeran a su partido a la debacle electoral sufrida este año y el anterior. Y una suerte semejante y aún más dramática espera a ARENA sino entra pronta y decididamente por el camino del diálogo y la negociación para la solución del conflicto bélico.

A ARENA se le presenta con igual acoso la disyuntiva de continuar dilapidando el erario nacional y la ayuda internacional en un proyecto de guerra inútil o de saber y poder utilizar estos recursos en la satisfacción de necesidades y mejora de las condiciones de vida de las mayorías empobrecidas del país. Será ésta la segunda oportunidad en que ARENA y la derecha disponen del aparato del Estado para probar su auténtico compromiso con las mayorías populares. Entre los años 82 y 84 controlaron los puestos claves del gobierno y lo hicieron muy mal. Tan mal que entonces padecieron las amargas derrotas de las elecciones presidenciales del 84 y legislativas y municipales del 85, ciclo por el que en 88 y 89 también han transitado los demócrata cristianos.

La justicia social sigue siendo hoy tan imperiosa y problemática como cuando la democracia cristiana tomara el poder, prometiéndola incluso en contra de los intereses de los que ahora la desplazan con las mismas promesas de paz y progreso social. Si ARENA fracasa en la consecución de este primordial objetivo no será por falta de experiencia propia y ajena.

Las organizaciones laborales ante las elecciones

AUMENTO: En su sesión plenaria del 16.03, la Asamblea Legislativa aprobó el aumento salarial de 200 colones para los empleados públicos, solicitado por el Ministerio de Hacienda, así como también el decreto que autoriza la emisión de 450 millones de colones en bonos que servirán al financiamiento de dicho aumento. La presidenta de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea, bachiller Gloria Salguero Gross (ARENA) comentó que "el Organó Ejecutivo con ese incremento salarial a los empleados públicos está generando una inflación del 25 por ciento, pero lo hace en forma eminentemente política y electorera y es el Ejecutivo el único responsable del daño que pueda sufrir el pueblo con esa inflación que está provocando".

DESTITUCION: A raíz de una moción presentada por la fracción de ARENA en la sesión legislativa del 16.03, los diputados de ARENA y del MAC aprobaron la destitución del presidente de la Corte de Cuentas, Lic. Ciro Cruz Zepeda. ARENA sostiene que este funcionario habría violado la Constitución al otorgarle finiquito al actual diputado del MAC, Luis Mejía Miranda, cuando éste se desempeñaba como coordinador de CONARA.

Tras una coyuntura nacional centrada en una profunda preocupación por la paz en los más, y por realizar un evento electoral que sorteara el poder y determinara a los nuevos presidente y vice-presidente de la república, en los menos; la dinámica del proceso nacional tiende a recuperar su "cotidianidad" —con todo lo de agitación, movilización y novedad que eso puede tener—. En el sector laboral más progresista, desde que el FMLN lanzara la propuesta de convertir las elecciones en un instrumento para avanzar hacia la construcción de la paz, las organizaciones han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos de movilización y pronunciamiento público a hacer patente su exigencia de la finalización política del conflicto y el inicio del trabajo por la construcción de la paz.

Llegada la fecha señalada meses atrás para la realización de los comicios presidenciales, éstos se han realizado "ignorando" la gran oportunidad para la paz que El Salvador tenía entre manos. Frente a ello, luego de algunos campos pagados, pequeñas marchas y alguna concentración considerable de protesta por el desperdicio de esa oportunidad, las organizaciones populares en general y las organizaciones laborales en particular, han ido presentando sus propias posturas ante el proceso eleccionario. Ha habido voces en contra, las más; voces a favor, y voces partidariamente politizadas que han hecho explícito su apoyo.

Voces a favor.

La Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC) —y sus organizaciones afiliadas— por un lado y, por otro, la fracción autodenominada "no gubernamental" de la Unión Popular Democrática (UPD), han expresado su apoyo explícito a los partidos PDC y ARENA, respectivamente. La UNOC, en reiterados campos pagados ha explicado que después de un análisis y reflexión sobre los programas de gobierno que cada uno de los partidos políticos en contienda presentaron, decidió respaldar el que los candidatos del PDC ofrecían, supuesto su apoyo al evento electoral mismo como único medio para

preservar e impulsar el "proceso de democratización" que presuntamente se ha vivido en El Salvador en los últimos años (**Proceso 369**).

La UPD no gubernamental, dirigida por Ramón Aristides Mendoza y Francisco Zaldaña, por su parte, ha manifestado desde el pasado mes de febrero que apoyaría al partido ARENA "con los votos individuales de todas sus bases sociales y con el mando colectivo del Congreso Nacional de Delegados...", según lo señalara el 15 de marzo en comunicado de prensa. En el mismo comunicado, argumenta su apoyo decidido a ese partido "a sabiendas que un voto a favor de ARENA es un voto seguro contra la conducción del PDC..., consciente además de que un voto por ARENA es un voto por la paz, unidad y justicia".

En cuanto al boicot a las elecciones que el FMLN declaró a raíz del rechazo gubernamental a su propuesta de enero pasado, la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a la CCT, CLAT y CMT la han valorado como una "actitud incoherente con la propuesta de paz presentada por el FMLN. Más que demostrar fuerza y capacidad militar, demuestra una total falta de voluntad política para solucionar el conflicto de una manera racional y objetiva", a lo que añaden que "estamos convencidos que las elecciones del próximo 19 de marzo son necesarias e indispensables en la presente coyuntura, ya para viabilizar una solución a la guerra, ya para condenar la violencia... El boicot a las elecciones es contrario a los intereses del pueblo, sobre todo cuando ese boicot está precedido de violencia. Cuando el pueblo considere que las elecciones han dejado de ser un medio real de participación, entonces, y sólo entonces, será el mismo pueblo quien las rechace; de lo contrario, todos los sectores nacionales están en la obligación de respetar la voluntad popular".

Voces en contra

La UNTS, como organización más representativa del sector laboral de oposición, expresó el 14 de marzo que valoraba las recientes elecciones como un evento conducente a una profundización de la crisis y la guerra; señalando específicamente que el voto "en estas elecciones es un voto por la guerra y abstenerse es una manifestación real para conquistar la paz". El 25 de marzo, ya conocidos los resultados oficiales del proceso eleccionario, la UNTS expresó, ante la elección de los candidatos por el partido ARENA, que éste "gobernará

PERIODISTAS: Un fotógrafo de la agencia Reuters, un sonidista de Canal 12 y un periodista holandés murieron asesinados por efectivos del ejército los días 18 y 19 de marzo. El primer caso se dio cuando los fotógrafos de Reuters, Roberto Navas y Luis Galdámez, ambos salvadoreños, transitaban a bordo de una motocicleta sobre el boulevard del Ejército y fueron interceptados por un retén de la Fuerza Aérea, el cual, tras pedirles sus papeles de identificación y permitirles continuar la marcha, les disparó, hiriendo a Galdámez y asesinando a Navas. El segundo caso se produjo cuando personal del canal 12 viajaba a La Unión, para cubrir el evento electoral, y un retén del batallón Arce abrió fuego contra el vehículo a la altura del kilómetro 142, hiriendo de muerte al sonidista de dicho canal, Mauricio Pineda. El periodista holandés, Cornelio Lagrouw, fue herido en fuego cruzado mientras cubría el desarrollo de las votaciones en San Francisco Javier (Usulután), al suscitarse un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. El vehículo a bordo del cual fue trasladado para buscarle asistencia médica fue blanco de un helicóptero de la Fuerza Aérea durante más de 20 minutos, tiempo en el que el periodista falleció.

ASESINATO: El Dr. Francisco Peccorini Letona, miembro del Comité Pro-Rescate de la Universidad de El Salvador, asiduo articulista de El Diario de Hoy y colaborador eventual de las revistas Análisis y Presencia, murió asesinado a balazos el 15 de marzo, cuando conducía su automóvil sobre la Avenida Olímpica. Al serle practicada la autopsia en el centro judicial "Isidro Menéndez", le fueron extraídos al cadáver dos proyectiles blindados, presuntamente de calibre 38. El Dr. Peccorini poseía un doctorado en Filosofía por la Universidad de Comillas; había sido director de la revista ECA en la década de 1950 y profesor en el seminario de San José de la Montaña, cuando éste estaba a cargo de la Compañía de Jesús. Posteriormente, abandonó dicha orden religiosa y se radicó en Estados Unidos, adoptando la nacionalidad norteamericana. Era profesor emérito en filosofía de la Universidad estatal de California en Long Beach. Al condenar el asesinato, el embajador norteamericano en San Salvador, William Walker, expresó que "no hay objetivo político, ni justificación posible que pueda usarse como excusa para este inhumano y despreciable acto".

con mano dura para ahogar la movilización y los reclamos de los trabajadores". Posiciones similares han mostrado tener todas las organizaciones miembros de la UNTS que se han pronunciado, así como la CTS, que presentan como argumento que aquí las elecciones no se piensan ni se hacen para la paz, sino para la justificación del estado de guerra y el irrespeto continuo a los derechos humanos. SOICSCES ha hecho un "llamado a nuestro pueblo a repudiar las elecciones ya que con capturas, secuestros y asesinatos, las elecciones sólo sirven para aumentar la guerra, la crisis y el hambre del pueblo".

Al respecto, el SOICSCES, FENASTRAS y la UNTS han denunciado a través de comunicados de prensa la captura de dos dirigentes de la primera el 20 y 24 de marzo. FENASTRAS ha difundido el 20 de marzo una "Carta abierta a los representantes del gobierno de los EUA" que visitaron al país para presenciar el evento electoral, en la que solicitan a éstos interceder para la liberación de los sindicalistas del SOICSCES capturados, y del secretario general del STITAS y secretario de organización de FENASTRAS, detenido el pasado 16 de marzo. La UNTS denunció también a la prensa, el 27 de marzo, la captura de un miembro de CODYDES ocurrida el día anterior.

Por otro lado, el SOICSCES también ha denunciado que el 15 de marzo "un batallón de la Policía de Hacienda (PH) invadió las instalaciones del proyecto de construcción COGEFAR, Apopa —cuyos trabajadores realizan desde días atrás un paro indefinido de labores para exigir el cumplimiento de sus demandas reivindicativas—, hicieron saqueo de bodegas de la empresa y el local sindical y amenazas a muerte a trabajadores". El 19 de marzo, la prensa informó que la PH cateó las bodegas de COGEFAR "desmantelando una fábrica de miguelitos y un centro de reuniones de representantes del FMLN con representantes de la UNTS y el MPTL". Asimismo, la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (ADEMUSA) denunció el 21 de marzo que su local fue cateado y parcialmente saqueado ese día; hecho que fue condenado en la misma fecha por FESTIAVTSCE y la FUSS.

En este contexto, y después de que cerca de un 35 por ciento de la población en edad de votar acudiera a las urnas, y surgiera como producto de dicho evento un triunfo electoral de la oferta política de la derecha, representada en el partido ARENA, las posibilidades reales de "cambiar para mejorar" de los sectores populares aún no prometen presentarse.

Elecciones en medio de la guerra

Tras el rechazo gubernamental a discutir la propuesta guerrillera de posponer las elecciones bajo un nuevo marco electoral, el país entero entró en un proceso caracterizado por una creciente tensión militar (**Proceso 375**) que se constituyó en el escenario dentro del cual debieron desarrollarse los comicios del pasado 19 de marzo. Como era de esperarse por la dinámica misma del proceso, así como por las enfáticas declaraciones y advertencias de los jefes castrenses y de los mandos rebeldes, el tenso e incierto clima de guerra que se fue entretejiendo se concretó en un sensible incremento de las acciones armadas en todo el territorio nacional, muy superior al que caracterizó a las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1988.

De esta suerte, la situación militar que envolvió a las presentes elecciones se ha convertido en la de mayor actividad bélica en lo que va del año, tanto por la cualidad como por la cantidad de las operaciones, especialmente guerrilleras. Las acciones de desgaste, concretamente ataques y emboscadas; como las de sabotaje, de manera especial las dirigidas contra la red nacional de distribución eléctrica y el transporte, fueron profundizadas y extendidas paralizándolo prácticamente a todo el país.

El sabotaje

En lo que a las operaciones de sabotaje se refiere, después de haber anunciado su disposición de boicotear las elecciones, el FMLN decretó el primer paro al transporte terrestre, iniciado el 16 de marzo y concluido a las 6:00 am del día 20. En esta ocasión, las advertencias guerrilleras enfatizaron aún más el acata-

miento de la medida por parte de los transportistas, bajo el riesgo de que sus unidades serían saboteadas durante y después del paro. La medida fue extendida a otros medios de transporte colectivo como los taxis, microbuses y pick ups, que suelen suplir la demanda en ocasiones como ésta, y al servicio de gasolineras. Durante los cuatro días de su duración el boicot logró paralizar en un 95 por ciento el transporte colectivo y comercial en todo el país, la circulación de los medios alternativos de transporte y de vehículos particulares disminuyó y la mayoría de estaciones gasolineras no brindaron sus servicios pese a la protección de la Fuerza Armada (FA), lo cual se agudizó por la falta de energía eléctrica debido a los sabotajes al tendido nacional.

En algunas zonas, el boicot logró paralizar totalmente la circulación vehicular, no obstante el intenso patrullaje de la FA. En las principales carreteras de la zona occidental, las unidades rebeldes montaron retenes para impedir el tráfico y en las ciudades algunos vehículos circularon portando banderas blancas. En fin, las características que rodearon a la operativización de la medida guerrillera la convirtieron en uno de los paros más fuertes y efectivos hasta la fecha. Al concluir el mismo, se contabilizaron por lo menos 7 vehículos y 2 gasolineras saboteados. Más tarde, el día 27, en la capital fue incendiado un autobús más por haber circulado durante el paro.

Por su parte, la FA inició con un día de anticipación su ya conocido Plan Caminante, implementando operativos de patrullaje en las principales carreteras y ciudades del país; y anunció un incremento de las medidas de seguridad en las zonas urbanas, especialmente en San Salvador. De esta

suerte, los jefes castrenses informaron que más de 3 mil agentes de los cuerpos de seguridad, apoyados por batallones élite, estarían a cargo de la seguridad de los comicios en la capital; en el marco del desarrollo de cuatro operaciones dirigidas a garantizarlos. De acuerdo a las fuentes, éstas serían el Plan Caminante, para contrarrestar el boicot al transporte; Plan Democracia, para dar seguridad a todo lo concerniente al Consejo Central de Elecciones; Plan PAL, para prestar protección a las gasolineras; y Plan PMI, para dar seguridad a los observadores extranjeros. Pese a ello, las dos operaciones dirigidas a contrarrestar medidas concretas del FMLN no parecen haber logrado sus objetivos.

Aparejado al boicot al transporte, las fuerzas rebeldes desarrollaron una intensa campaña contra el sistema nacional de energía eléctrica, que puede ser considerada la más fuerte que se ha realizado en lo que va de la guerra. Ya para el 10 de marzo, el sistema de distribución de energía estaba funcionando con un déficit del 30 por ciento, al encontrarse fuera de servicio al menos seis líneas de transmisión primaria y tres de subtransmisión. El día 14, el déficit subió al 50 por ciento. Un día después, con el dinamitado de torres y postes en las áreas de San Martín, Nejapa y San Antonio Abad, en San Salvador; San Rafael Cedros, Cuscatlán; Mercedes Umaña, en Usulután; y cantón San Felipe, en San Vicente; que dejaron al menos nueve líneas primarias fuera de servicio, CEL informó que se estaba trabajando con apenas un 30 por ciento de la capacidad total. Para el 16 de marzo, dada la interrupción del sabotaje contra el sistema eléctrico, el déficit en la producción y distribución de energía ascendió al 90 por ciento, al quedar fuera de servicio no menos de 15 líneas primarias de distribución, situación que se mantuvo prácticamente inalterable hasta el día 22.

Como consecuencia del profundo déficit

energético, fue considerablemente afectado el sistema de distribución de agua potable. Para el día 17, en la zona metropolitana de San Salvador, sólo un 25 por ciento se encontraba recibiendo el servicio y de forma irregular. A esto se agregó una escasez de gas propano al paralizarse la producción del mismo, una escasez de combustible y alimentos y, además, la falta de transporte. Por su lado, la CEL puso en marcha un rígido plan de racionamiento de la energía que se agudizó aún más al fundirse por sobrecarga una planta de emergencia en Soyapango, al oriente de la capital, y tener que ser desconectadas otras en San Miguel, por la misma razón. Muchas zonas del territorio nacional quedaron desprovistas totalmente del servicio y en la ciudad capital el abastecimiento llegó a cubrir en algunos momentos, y de forma racionada, sólo las áreas de hospitales y las plantas de bombeo de ANDA, institución encargada del servicio de acueductos y alcantarillados.

Finalmente, el 29 de marzo, en un balance general, CEL informó que durante el mes la red nacional de producción y distribución de energía sufrió un total de 142 sabotajes, resultando destruidas un total de 81 torres de líneas primarias, 40 de subtransmisión, 31 postes, 15 transformadores, con un saldo de pérdidas que ascienden a los 6.5 millones de colones. Tales datos pueden dar una idea de las dimensiones que cobró el sabotaje y de sus consecuencias. Otros sabotajes menores habrían sido los realizados contra la cooperativa Entre Ríos, de Zacatecoluca, el 16 de marzo, donde se causaron daños a las instalaciones; contra el beneficio San Emilio, en Jucuapa, Usulután el día 18, y contra una fábrica textilera localizada en el cantón Plan del Pito, en Mejicanos, San Salvador el 25.

Acciones militares

Al igual que el sabotaje, las operaciones

estrictamente militares experimentaron un sensible incremento tanto en el campo como en la ciudad; lo cual puede hacer pensar no sólo en la efectividad alcanzada por las fuerzas rebeldes, sino en la posibilidad de un crecimiento de las mismas, que le permitiría la operativización de acciones conjuntas de desgaste y sabotaje, sin que unas signifiquen la reducción de las otras.

Ciertamente, los quince últimos días de marzo estuvieron caracterizados por un progresivo incremento de las acciones bélicas por parte del FMLN que extendió sus acciones a todas las zonas del país. Un recuento de las mismas puede dar una muestra de su intensidad y bosquejar el panorama en medio del cual se desarrollaron las elecciones presidenciales del 19 de marzo.

De acuerdo a fuentes castrenses, el día 15, fuerzas guerrilleras operativizaron ataques contra el Destacamento Militar No. 1 y puestos de avanzada en la periferia de Chalatenango y Nueva Concepción. Como saldo de los combates resultaron 9 rebeldes y 5 soldados muertos y 6 soldados más heridos. Otro rebelde murió en combate contra efectivos del Batallón Belloso, en Nejapa, al norte de San Salvador. Un día más tarde, el 16, se registraron fuertes ataques contra posiciones del Destacamento Militar de Ingenieros de la FA en la periferia de Zacatecoluca, en La Paz; contra otras seis posiciones del ejército en la zona comprendida entre Cinquera y Tejutepique, en Cabañas, y contra tropas de la Quinta Brigada de Infantería en Santa Clara, en San Vicente.

Dando continuidad a su campaña ofensiva y haciendo efectivas sus advertencias de incrementar las operaciones durante la realización de las elecciones, entre el 18 y 19 de marzo las fuerzas insurgentes desarrollaron considerables ataques contra posiciones militares en las poblaciones de Chinameca, en San Miguel; Santa Elena y San

Francisco Javier, en Usulután; y San Miguel de Mercedes y Tejutla, en Chalatenango. Otros fuertes combates se registraron en las jurisdicciones de Corinto, Cacaopera, San Isidro, Delicias de Concepción, en Morazán; Carolina, San Luis de la Reina y San Antonio El Mosco, en San Miguel; Anamorós, en La Unión; e Ilobasco, en Cabañas. Finalmente, entre el 27 y 28 de marzo, se reportaron fuertes enfrentamientos en las poblaciones de Texistepeque, en Santa Ana; San Francisco Morazán y Concepción Balres, en Chalatenango; y Villa Victoria, en el departamento de Cabañas.

La capital también experimentó con regular fuerza la operatividad de las unidades rebeldes. El día 14 fue emboscada una patrulla de la Policía Nacional al suroeste de la capital, resultando un agente muerto. Dos días después, comandos urbanos atacaron con disparos de lanzacohetes una posición de la Guardia Nacional y las instalaciones del CITFA en el sur de San Salvador, destruyendo un dormitorio de la tropa. El 19 de marzo, día de las elecciones, se registraron fuertes y prolongados combates en el norponiente de la capital, cuando comandos urbanos atacaron posiciones de la FA en San Ramón, resultando un cabo muerto y varios soldados heridos. Finalmente, el día 22, unidades rebeldes atacaron con disparos de lanzacohetes LOW las instalaciones del Centro de Inteligencia de la FA y de la Policía Nacional de Monserrat, al sur y sur-oeste de la capital, respectivamente. Se reportó además un hostigamiento contra el Centro Penal La Esperanza, de Mariona.

En suma, este incremento descomunal del operar guerrillero, derivado del rechazo gubernamental a posponer las elecciones, se ha constituido en el marco obligado de referencia para la consideración del significado de los recién pasados comicios; en este contexto, los mismos parecen haberse reducido, una vez más, a ser un arma más para la guerra.

Consenso bipartidista de EUA hacia Centroamérica

Dos meses después de haber tomado el control de la Casa Blanca, la Administración Bush ha logrado configurar por fin una estrategia bipartidista que define con un mayor margen de precisión el actual papel norteamericano dentro del conflicto nicaragüense. El 24 de marzo, a escasos días para finalizar el flujo de asistencia humanitaria estadounidense a las fuerzas antisandinistas, el presidente Bush y los más prominentes líderes del Congreso firmaron un acuerdo a través del cual se hace posible la continuación de dicha asistencia a los niveles actuales —4.5 millones de dólares al mes— durante un período que concluirá en febrero del próximo año.

Los grandes rotativos norteamericanos recibieron la suscripción de tal convenio con unánime optimismo y consideraron que el mismo constituye el inicio de una "nueva era" en la formulación y ejecución de la política exterior norteamericana para Centroamérica. El *Washington Post* sostuvo que el acuerdo era "la virtual sepultura de la línea dura de la política de Reagan" hacia Nicaragua. En efecto, los términos estipulados para continuar proporcionando ayuda humanitaria a la contra nicaragüense han restablecido, al menos por el momento, el consenso perdido entre el Ejecutivo y el Congreso respecto de este polémico aspecto de política exterior.

Aparentemente, la determinación de los presidentes centroamericanos de promover la desmovilización de las fuerzas antisandinistas, aun a costa de la voluntad norteamericana, habría acelerado en el presidente Bush la necesidad de construir ese consenso bipartidista. Lo fundamental para Bush —de hecho, ella era la única opción a negociar con el Congreso— era garantizar el mantenimiento de la contra como una fuerza

militar organizada pero inactiva en sus bases de Honduras, como elemento de disuasión para el gobierno nicaragüense. Sin embargo, un planteamiento con esas características previsiblemente encontraría muchas objeciones entre los legisladores demócratas, para quienes "ese enfoque obcecado sólo le dará excusas a los sandinistas para evitar dar los pasos hacia la democracia que desean sus vecinos y los Estados Unidos".

El Secretario de Estado, James Baker, anunció el 15 de marzo el inicio de sus gestiones ante el Congreso para obtener los fondos que se destinarían al avituallamiento de los antisandinistas. Baker aseguró al Congreso que el uso de dichos fondos se enmarcaría dentro de "una estrategia para dar una oportunidad a la diplomacia, sin abandonar a la Resistencia Nicaragüense. Es una estrategia compuesta por varias partes diferentes —precisó Baker—. Identifica los niveles esenciales de democracia y esboza los momentos en que los sandinistas y otros deberían cumplir con ellos. Incluye, además, incentivos para cumplir esos niveles de democracia en los momentos específicos y desestímulos o sanciones si no cumplen, y propone diferentes tipos de mecanismos de verificación para determinar el cumplimiento de las partes". Explicar los detalles específicos de este presunto nuevo enfoque de la problemática centroamericana, mantuvo al Secretario de Estado en permanentes audiencias con los subcomités de relaciones exteriores y de asignaciones presupuestarias al exterior, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Los congresistas, por su parte, externaron todas sus dudas y reservas de modo que en esos encuentros, según manifestó el líder de la Cámara de Representantes, Jim Wright,

hubo "un gran esfuerzo para tratar de crear una política que permita encontrar un camino por el que podamos transitar juntos con respecto a América Central, una de las cosas que nos ha dividido amargamente en los últimos años".

Los esfuerzos del Secretario de Estado cristalizaron con la concesión de 45 millones de dólares más para garantizar la subsistencia de la contrarrevolución. Este logro, con todo, no puede calificarse como un éxito para la administración Bush. El Congreso se reservó el derecho de determinar las regulaciones bajo las cuales esa asistencia se haría efectiva. En primer lugar, los desembolsos de los recursos estarán condicionados al mantenimiento de la política de la Casa Blanca "de apoyo a los esfuerzos de negociación y pacificación en Centroamérica". Ello significa, en segundo término, que las fuerzas antisandinistas "no podrán realizar acciones militares contra Nicaragua, y podrán utilizar parte de la ayuda para su reinserción voluntaria en la vida política y social bajo condiciones justas y democráticas". Por tanto, aunque la contra tendría asegurada su existencia un año más, el Congreso estaría forzando a la Administración Bush a "abandonar el objetivo de derrocar a los sandinistas por la fuerza". De hecho, hay observadores políticos que opinan que el consenso entre la Casa Blanca y el Congreso evidenciaría después de todo una "forma elegante de salir de Centroamérica sin dar la apariencia de abandonar a la contra". Lo cierto es que entre ambas partes se califica la adopción del acuerdo como una victoria propia. Para Bush, ahora entre la

Casa Blanca y el Congreso "estamos hablando un sólo lenguaje" de suerte que "ahora toca al gobierno sandinista cumplir sus promesas y si lo hacen tenemos oportunidad de comenzar un nuevo día en Centroamérica". De igual modo, para Jim Wright, el acuerdo "es de proporciones históricas en el que de forma bipartidista, el Congreso y el gobierno damos nuestro inequívoco apoyo a los líderes electos de Centroamérica en su búsqueda de paz y democracia y los ayudamos".

El gobierno nicaragüense, ante esta nueva concesión de fondos a la contra, ha recordado a la comunidad internacional y al propio gobierno norteamericano que toda ayuda a dichas fuerzas que no sea exclusivamente humanitaria es violatoria y contraria a los intereses de las cinco naciones del istmo. En tal sentido, no ha rechazado ni condenado explícitamente la nueva ayuda para los antisandinistas, pero sí ha criticado fuertemente los términos del acuerdo. Para el gobierno nicaragüense, tal acuerdo es "un ejemplo típico de ambigüedades y contradicciones que resultan inevitables cuando, en aras de un consenso, los documentos se redactan por comité".

No cabe duda que el proceso de paz en la región, sobre todo por lo que toca al conflicto nicaragüense, avanza en forma lenta pero significativa. Si el nuevo consenso bipartidista no se transforma en otro obstáculo a los esfuerzos de pacificación negociada, Centroamérica irá paulatinamente recuperando la tranquilidad y reemprenderá la búsqueda del desarrollo económico.

Balance político de las elecciones (I)

1. El contexto pre-electoral inmediato

Según datos del Consejo Central de Elecciones (CCE), estaban acreditados para votar 1,834,000 ciudadanos. El CCE distribuyó 6,300 urnas, conteniendo cada una 300 papeletas. Tomando en cuenta que, en teoría, cada junta estaría integrada por cinco miembros, el total de ciudadanos que integraría las mesas receptoras ascendería a unos 31,500. Adicionalmente, el CCE estimaba que los partidos destacarían a unos 50 mil vigilantes.

Debido a las condiciones de violencia imperantes en algunas zonas del país, el CCE estimaba que las votaciones no podrían efectuarse en unos 19 municipios. Según el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, esos municipios serían 21: nueve en Chalatenango, dos en San Miguel, dos en Cabañas y ocho en Morazán, debido a que estaban comprendidos en áreas conflictivas; a que no había en ellos suficiente población, la cual habría huido por la violencia; o simplemente debido a una insuficiente carnetización.

En la ciudad de San Salvador, el CCE dispuso la instalación de siete centros de votación, ubicados en la Alameda Roosevelt, el parque Bolívar, la plaza Libertad, el parque Centenario, el paseo Independencia, y las instalaciones del INFRAMEN y del Instituto Técnico Industrial.

La disposición de tales centros de votación estuvo precedida de una violenta disputa entre ARENA y el PDC. ARENA aducía que la Fuerza Armada había recomendado "lugares cerrados para mayor seguridad". El 16 de marzo, su candidato a la Vicepresidencia, Sr. Francisco Merino, denunció que el PDC pretendía concentrar en pequeñas áreas "gran cantidad de urnas" para sembrar

el caos y forzar a una segunda ronda electoral. Según Merino, "la alta concentración de ciudadanos genera desórdenes, lo que puede perjudicar la votación e incluso dar lugar a que termine y tenga que anularse. La maniobra es clara: buscan reducir los niveles de votación para que ARENA no amplíe el margen y forzarnos a un resultado que lleve a la segunda vuelta".

A su vez, el presidente del CCE, Ing. Ricardo Perdomo, respondió que "el ejército tiene la capacidad para darle esa seguridad a dichos centros en todo el país"; mientras que los dirigentes democristianos, Dr. José Antonio Morales Ehrlich y Sr. Roberto Viera, denunciaron que "ARENA quiere los puestos de votación en las colonias San Benito y Escalón, donde ellos son los dueños de todas las casas inmediatas; en cambio, el ciudadano común y corriente con más confianza va a la plaza Libertad o al centro de la ciudad...lo más justo es que los centros se pongan cerca de donde vive la mayoría". En relación a las acusaciones de ARENA sobre el caos que presuntamente pretendía sembrar el PDC, Morales Ehrlich y Viera aseguraron que "ARENA tiene grupos de choque, que van a hacer desórdenes, porque lo hemos averiguado. También es probable que algunos comandos urbanos quieran molestar en la periferia de la ciudad". En el mismo contexto, el PDC denunció presiones de ARENA sobre el consejal del PCN, Ing. Juan José Bonilla, para que éste favoreciera la supresión de tres centros de votación en la capital; en represalia por la negativa de Bonilla a las presiones, la bancada arenera en la Asamblea habría procedido a la destitución del Presidente de la Corte de Cuentas, Lic. Ciro Cruz Zepeda (PCN).

El paro al transporte, que en un principio el FMLN había sido anunciado para iniciarse a partir del 15 de marzo, principió el 16. El

CUADRO 1
CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES DE EL SALVADOR RESULTADOS
ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, 19 DE MARZO, 1989

Depto.	Munc.	Cant PDC	ARENA	PCN	MAC	CD	UP	AD	PAR	Total válidos	Impug.	Nulos	Abst.	Total de votos
01 San Salvador	19	97252	147691	5962	1590	18205	2036	1468	962	275186	968	10755	1338	288225
02 Santa Ana	13	35050	47136	5512	775	4018	469	603	350	93911	714	5583	1020	101238
03 San Miguel	15	22917	30913	2451	514	1070	145	270	169	58449	303	2791	273	61816
04 La Libertad	22	35320	58776	3789	789	4532	549	567	384	104706	557	5993	888	112154
05 Usulután	20	14953	26469	2165	709	806	152	163	150	45567	296	2837	357	49057
06 Sonsonate	16	37525	46340	3644	718	1792	272	377	295	90963	569	6033	725	98290
07 La Unión	18	16286	16114	1416	398	284	90	70	124	34782	426	2038	316	37562
08 La Paz	20	13836	25125	1782	453	964	205	173	139	42677	299	2306	386	45748
09 Chalatenango	33	10852	14058	1765	896	378	174	79	97	28297	280	1717	268	30562
10 Cuscatlán	18	8266	24280	1443	452	1078	98	145	108	35870	187	2155	408	38818
11 Ahuachapán	12	20645	28882	4022	970	1527	187	150	187	56570	327	3982	709	61588
12 Morazán	26	8244	10804	2222	551	262	50	77	93	22303	189	2312	248	25050
13 San Vicente	13	11579	15518	864	164	454	123	115	76	28893	215	1372	303	30783
14 Cabañas	9	5644	13264	1181	321	276	59	108	73	20924	154	1218	166	22462
Total General	252	338369	505370	38218	9300	35642	4609	4363	3207	939078	5484	51182	7409	1003153
Porcentajes por Partido		36.03	53.82	4.07	0.99	3.80	0.49	0.46	0.34					

día 17, presuntos comandos urbanos lanzaron una bomba incendiaria contra un microbús de pasajeros. El mismo día, desconocidos ametrallaron una ambulancia de la Cruz Roja a la altura de Soyapango. En el mismo marco, presuntos miembros de la guerrilla enviaron a los medios de comunicación amenazas a la prensa así como a los miembros de las juntas electorales y ciudadanía que concurriera a las urnas.

El día 18, a través de la radio Farabundo Martí, la Comandancia General del FMLN se vio obligada a aclarar que tales amenazas obedecían a una "campaña de desinformación" orquestada por el régimen, al tiempo que negó categóricamente acciones como la del ametrallamiento de la ambulancia o la bomba incendiaria contra el microbús. La Comandancia denunció los "comunicados apócrifos redactados con un evidente tono terrorista, haciendo una burda exaltación de la violencia, con amenazas a la prensa, términos que son ajenos a los contenidos en los documentos en los cuales definimos nuestra posición oficial". Asimismo, el FMLN recordó que "los únicos comunicados están firmados por nuestra Comandancia General y transmitidos a través de nuestras emisoras".

Comoquiera que sea, las amenazas profertas por el frente oriental "Francisco Sánchez" provocaron la renuncia de algunas juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos en el Oriente del país. El propio Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas, lamentó que, aun cuando había solicitado al FMLN la suspensión del paro o por lo menos su acortamiento o suavizamiento, no había logrado más que el compromiso de la Comandancia de respetar a los votantes, a los miembros de las juntas electorales y los lugares de votación.

De otra parte, las gremiales empresariales exhortaron vehementemente a la ciudadanía a ejercer el sufragio. Por su lado, el

Fiscal General de la República, Dr. Roberto García Alvarado, envió a los medios de prensa un comunicado demandándoles abstenerse de divulgar mensajes "en los que se incite al pueblo a no ejercer el sufragio" y excitando a toda la ciudadanía a "votar masivamente" para demostrar "su rechazo total al terrorismo y a las violaciones de los Derechos Humanos, provenientes de grupos que pretenden negar su derecho a vivir en paz, con justicia y libertad".

En una posición intermedia entre los llamados al abstencionismo y las exhortaciones a votar, el Nuncio Apostólico en El Salvador, Monseñor Francesco de Nittis, informó que el Papa había recibido el llamamiento lanzado por el Presidente Duarte el día 13, y aseguró que el Pontífice "formula fervientes votos a fin de que estas elecciones puedan desarrollarse libremente, en el pleno respeto del ejercicio del derecho del voto de todos los salvadoreños, así como en el uso del derecho de expresar sus propias opciones en un ambiente de civil entendimiento y concordia nacional".

2. Los resultados electorales: triunfo inapelable de ARENA

Los datos oficiales ofrecidos por el CCE se presentan en el cuadro 1. Según ellos, ARENA habría ganado con el 53.82 por ciento del total de votos válidos. La victoria de ARENA ha sido inapelable. En ninguno de los seis eventos electorales anteriores, un partido había ganado con una proporción tan alta de votos. El PDC no lo logró ni siquiera en la segunda vuelta electoral de 1984, cuando obtuvo el 53.6 por ciento de los votos válidos. En la primera vuelta, había obtenido el 43.41 por ciento de los votos, según se aprecia en el cuadro 2. En los comicios legislativos de 1985, el PDC ganó con el 52.35 por ciento de los votos válidos.

El análisis comparativo con los eventos electorales anteriores puede arrojar algunas

CUADRO 2
RESULTADOS ELECTORALES POR PARTIDO DURANTE 1982-1989

	1982	1984	1985	1988	1989
PDC	546,218 (40.1)	549,727 (43.41)	505,338 (52.35)	326,716 (35.1)	338,369 (36.03)
ARENA	402,304 (29.53)	376,917 (29.76)	286,665 (29.7)	447,696 (48.1)	505,370 (53.82)
PCN	261,153 (19.17)	244,556 (19.31)	80,730 (8.36)	78,756 (8.5)	38,218 (4.07)
CD	—	—	—	—	35,642 (3.8)
AD	100,586 (7.38)	43,929 (3.46)	35,565 (3.68)	16,211 (1.7)	4,363 (0.46)
MERECEN	—	6,645 (0.52)	689 (0.071)	—	—
MAC	—	—	—	—	9,300 (0.99)
POP	12,574 (0.92)	4,677 (0.36)	836 (0.087)	1,752 (0.19)	—
PAISA	—	15,430 (1.21)	33,101 (3.43)	19,609 (2.1)	—
PPS	39,504 (2.9)	24,395 (1.92)	16,344 (1.69)	—	—
Liberación	—	—	—	34,960 (3.8)	—
UP	—	—	—	—	4,609 (0.49)
PAR	—	—	2,963 (0.31)	5,059 (0.54)	3,207 (0.34)

Fuente: C.C.E. Las cifras entre paréntesis se refieren a los porcentajes del total de votos válidos obtenidos por cada partido. Los datos de 1984 son los correspondientes a la primera ronda.

luces adicionales para interpretar los alcances de la actual victoria de ARENA. Desde el punto de vista de las analogías formales, la comparación se impone sobre todo entre la primera ronda electoral de 1984 y los co-

micios del 19 de marzo recién pasado, dado el carácter presidencial de ambas elecciones (y dado que ARENA ha triunfado en la primera ronda, lo cual desvirtuaría una estricta comparación con la segunda vuelta de

1984) pero también los comicios de 1985 y 1988 pueden servir de pauta de referencia para examinar la diacronía de las simpatías electorales.

En 1984, el PDC sólo fue derrotado por ARENA en Cuscatlán y Cabañas, tradicionales bastiones areneros. En Usulután, San Vicente y Ahuachapán, la superó por márgenes relativamente estrechos. En todos los otros departamentos venció a ARENA holgadamente. En 1985, la ventaja electoral democristiana aumentó significativamente, venciendo a ARENA en todos los departamentos, con excepción de Cuscatlán.

A partir de 1988, la correlación electoral de fuerzas entre ambos partidos se invirtió bruscamente. En las elecciones legislativas de dicho año, ARENA venció contundentemente al PDC en casi todo el país. El PDC sólo pudo ganarle en tres departamentos (Chalatenango, La Unión y Morazán) y además lo hizo por márgenes estrechos: en Chalatenango, por 928 votos; en La Unión, por 177 y en Morazán, por 898. En todos los demás departamentos, ARENA triunfó holgadamente.

En las elecciones presidenciales del 19 de marzo recién pasado, ARENA ha resultado triunfador en todos los departamentos, con excepción de La Unión, donde el PDC la derrotó por un estrecho margen de 172

votos. En todo el país, ARENA ha superado al PDC por casi 170 mil votos.

La debacle principal del PDC, como ya se evidenció en los comicios legislativos de 1988, ha acontecido en San Salvador, donde dicho partido habría perdido, en las actuales elecciones, 100 mil votos respecto de los que obtuvo en 1984 y 50 mil respecto de 1985. En el mismo departamento, en cambio, ARENA habría ganado 50 mil votos respecto de 1984 y más de 70 mil respecto de 1985.

De 505,338 votos obtenidos en 1985 (52.35 por ciento del total de votos válidos), el PDC descendió en 1988 a 326,716 (35.1 por ciento). En las actuales elecciones ha superado ligeramente esta última cifra, obteniendo 338,369 votos, equivalentes al 36.03 por ciento del total de votos válidos. Entre 1985 y 1989, el PDC habría perdido más de 150 mil votos. ARENA, en cambio, subió sucesivamente de 286,665 votos (29.7 por ciento) en 1985 a 447,696 votos (48.1 por ciento) en 1988 y a 505,370 votos (53.82 por ciento) el 19 de marzo recién pasado. Entre 1985 y 1989, pues, ARENA habría incrementado en más de 200 mil votos su caudal electoral, lo suficiente para constituirse de modo indiscutible en la primera fuerza electoral del país.

